

MINUTA INTERVENCION PROYECTO CIERRE DE CALLES Y PASAJES

Señora Presidenta:

Algo no estamos haciendo bien si tenemos que discutir este proyecto de ley; no son las personas honestas y trabajadoras las que deben encerradas detrás de rejas y portones, son los delincuentes.

Claramente, la batalla contra la delincuencia no conoce final, es interminable, ninguna sociedad en la historia ha logrado acabar con ella; pero sí es posible lograr tenerla bajo control. Una forma efectiva de lograr una mejor ciudad es usar los espacios públicos, apoderarse de ellos, llenarlos de actividades. Cuando es la gente decente la que se encierra es el delincuente el que gana.

¿Pero que hacemos mientras tanto eso ocurre? El año 2011 este Congreso permitió el cierre de calles y pasajes siempre que solo tuvieran una entrada y una salida y cumpliendo ciertos requisitos como la aprobación del 90% de los propietarios, de la municipalidad, previo Informe favorable de algunos organismos.

Hoy nos enfrentamos a la necesidad de modificar esta norma, de por sí restrictiva y adaptarla los fallos del tribunal Constitucional y los dictámenes de la Contraloría.

Es irónico, ningún alcalde quiere una cárcel en su comuna, pero la mayoría está de acuerdo en esta norma que busca ayudar a encerrarse a los vecinos.

Como ex alcalde de La Cisterna, diputado por la zona sur de la Región metropolitana y ahora senador de la Región de Los Lagos me doy cuenta que hay un conflicto enorme, entre los vecinos que cierran de manera regular e irregular cités y pasajes y otros vecinos que requieren usar esos pasajes para evitar vueltas eternas o calles aún más peligrosas...nuevamente el conflicto es entre el espacio público y el Derecho al desplazamiento, o entre el derecho a la seguridad personal versus el legítimo Derecho a transitar por las calles, pasajes o calles locales de nuestro país.

Mientras una parte de la sociedad y la izquierda buscan destruir o socavar a instituciones esenciales como Carabineros, la PDI o incluso el ministerio público, los proyectos de ley que importan a la ciudadanía, siguen siendo la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general.

Voy a apoyar este proyecto y las modificaciones realizadas en la discusión en particular, por hoy es necesario; creo que supera los cuestionamientos constitucionales y es una mejora, por lo que felicito a los miembros de la comisión de gobierno por su trabajo. Sin embargo, espero poder vivir el día en que las rejas y portones sean juegos de plaza, en que la policía

sea respetada y temida por los delincuentes y que los únicos que vivan tras las rejas sean los verdaderos criminales.

Apruebo, señora Presidenta.

He dicho, muchas gracias.

MINUTA PROYECTO QUE AUMENTA PENAS PARA LA USURPACIÓN

PROBLEMAS

- 1) Norma pensada para otra época donde eran los terratenientes quienes se tomaban tierras del Estado o de los mapuches
- 2) ya sea una toma violenta o pacífica, la usurpación solo tiene como sanción la multa (No violenta 6 a 10 UTM; Violenta de 11 a 20 UTM) que además casi nunca se paga.
- 3) Al no ser delito sin pena aflictiva, impide que se pueda llevar detenido al usurpador, o pedir la medida de prisión preventiva; solo se le puede llevar a la unidad más cercana para verificar identidad
- 4) A pesar que la doctrina está de acuerdo en que es un delito de acción permanente (se sigue cometiendo mientras esté usurpado el inmueble); un fallo de la Corte Suprema del año 2018, determinó que solo hay flagrancia durante las primeras 12 horas desde la toma del inmueble o terreno. Aunque no hay otro fallo posterior, Carabineros se ha restado de ejecutar el desalojo después de ese plazo sin orden judicial.
- 5) En muchos casos, el ministerio público decide que la toma no es delito, sino que es un asunto civil y hay que interponer acción de precario, la cual demora más de un año en que se falle en primera instancia.
- 6) Penas son bajas, porque según la ley chilena, la posesión solo se cambia por la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, por lo que la toma no afecta el derecho de propiedad sobre el inmueble.

PROBLEMAS POLITICOS

1)La usurpación tiene distintas características según la región y el fin de la toma:

- a) Reivindicatoria: Conflicto mapuche; se toman los terrenos para presionar la compra por CONADI o cosechar y vender los productos que ahí se producen
- b) Uso personal: Esencialmente en sectores urbanos, se toman inmuebles para vivir, crear círculo de protección de narcos y/o aplicar el procedimiento de posesión del Ministerio de Bienes Nacionales; o terrenos en playas del norte como segunda vivienda
- c) Social: Tomas y campamentos por sectores vulnerables que no pueden acceder a arriendo de inmuebles por los bajos ingresos o el alto precio de los inmuebles
- d) Comercial: Especuladores se toman terrenos para parcelarlos y estafar a terceros con ventas simuladas.

2) La usurpación como arma política en el conflicto de la Araucanía

- 3) Temores que pueda ser usado contra los estudiantes que se “toman colegios o Universidades”(Lo que no tiene justificación en los hechos)

4) Temores que se usen las sanciones contra las personas vulnerables que se tomen terrenos por necesidad.

QUE DEBE CONTENER EL PROYECTO (EN NUESTRA VISIÓN)

1) Aumento de sanción para la usurpación para que el usurpador pueda ser detenido y permita medidas cautelares más gravosas, como arresto domiciliario nocturno o total o el no acercarse al inmueble.

2) Que la usurpación sea considerada siempre como “delito de ejecución permanente” para permitir el desalojo sin necesidad de autorización judicial, o que se extienda la flagrancia a un periodo más extenso de, al menos una semana.

3) Que quede establecido la posibilidad de iniciar acción restitutoria del artículo 189 de Código Penal para que el legítimo dueño pueda recuperar rápidamente su inmueble.

4) Sancionar la reincidencia de la conducta (volver a tomarse el mismo terreno o inmueble después de ser desalojado). Sancionar como usurpación violenta cuando haya violencia en las cosas o intimidación (actualmente solo hay usurpación violenta cuando violencia contra las personas).



PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA PARA PERMITIR EL RETIRO DEL CIENTO POR CIENTO DE LOS FONDOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y PERMITE QUE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (DECRETO LEY NO. 3500) DECIDAN EL DESTINO DE DICHOS AHORROS.

Antecedentes.

El sistema de administración de los Fondos de Pensiones contenido en el D.L. 3500 está basado en la capitalización individual y la administración privada de dichos fondos.

De esta forma, cada chileno y chilena afiliado al sistema de capitalización individual tiene la propiedad de sus recursos, aunque destinados a un fin específico. El saldo de ahorro previsional y la rentabilidad obtenida durante su periodo de afiliación al sistema, determina su futura jubilación. El sistema le otorga al cotizante ciertos grados de libertad; así una persona puede escoger entre 5 tipos de fondos de acuerdo al nivel de riesgo que quiera enfrentar y también entrega la posibilidad de cambiarse de Administradora, ya sea por un tema de rentabilidad, cobro de comisiones o simplemente mala atención. La libertad de administración es un elemento esencial del sistema de capitalización individual. Es por ello que es deber de todos los poderes del Estado, la protección de los mismos.

Se han anunciado y se encuentran en tramitación diversos proyectos de reforma constitucional que buscan nacionalizar los fondos de pensiones, es decir, quitar la administración de los mismos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones y traspasarla a un ente público o estatal único con características aún por determinar. Esto ya ha ocurrido en otros países de la región y los resultados han

sido insatisfactorios. Los fondos se han usado no para invertir y generar rentabilidad a los cotizantes, sino que para comprar deuda pública y de esa forma financiar gastos del Estado.

Un ejemplo del mal uso de los mencionados recursos, lo constituye lo sucedido en la Argentina, donde, por ley, las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión se vieron obligadas a traspasar los fondos de los cotizantes a una Administradora Estatal, la cual destina dichos recursos a préstamos realizados al propio Estado, Provincias y Municipios, generándose entre el año 2017 a 2019 una pérdida de más del cuarenta por ciento (40%) en el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad” (FGS) equivalente a veintiséis mil millones de dólares.

En Chile, la rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, en los últimos 3 años, ha sido la siguiente:

Fondo A:

AFP con mayor rentabilidad: 8,65%

AFP con menor rentabilidad: 7,64%

Fondo B

AFP con mayor rentabilidad: 7,24%

AFP con menor rentabilidad: 6,32%

FONDO C

AFP con mayor rentabilidad: 5,26%

AFP con menor rentabilidad: 4,09%

FONDO D

AFP con mayor rentabilidad: 2,05%

AFP con menor rentabilidad: 1,37%

FONDO E

AFP con mayor rentabilidad: -0,21%

AFP con menor rentabilidad: -1,09%

El Fondo A, el de mayor rentabilidad en los últimos tres años, destina sus inversiones en una mayor proporción a Fondos de Renta Variable y, por ende, no obstante ser el más riesgoso, es el más rentable. En cambio, el Fondo E, que ha tenido una rentabilidad negativa promedio en los últimos tres años, es invertido en bonos de empresas, bonos estatales y bonos del Banco Central de Chile.

De esta forma, la experiencia comparada (Argentina) y la rentabilidad objetiva de los distintos fondos administrados por las AFP en nuestro país, nos demuestra que la decisión de inversión de dichos recursos, es un elemento determinante para las futuras pensiones.

En ese sentido, cada ahorrante previsional, ejerciendo la propiedad de sus fondos, debe ser el titular de la determinación del destino de los mismos y de su administración por la entidad que mejor convenga a sus intereses.

La existencia de multifondos ha permitido que los afiliados puedan destinar sus recursos a la alternativa que les parece más atractiva, ponderando niveles de riesgo y rentabilidad y esta libertad de elección, debe ser constitucionalmente protegida y garantizada.

De acuerdo al informe del Banco Central de marzo de 2021, los recursos que fueron retirados de las cuentas de capitalización individual, a enero de este año y que, a esa fecha, ascendían a treinta y cuatro mil millones de dólares, fueron destinados en un 62% al ahorro y sólo un 15,2% fue destinado al consumo, lo que demuestra que los afiliados al sistema privilegian mantener esos recursos ahorrados en un sistema que les garantice la propiedad de sus recursos, de forma tal de disponer de los mismos, mantengan como objeto principal, satisfacer sus

necesidades de seguridad previsional y de largo plazo. Manteniendo, en todo caso, el carácter heredable de dichos recursos.

Es por ello que el objeto de esta reforma constitucional es la protección de la propiedad privada de estos recursos, permitiendo que cada afiliado al sistema, decida, libremente, sobre el destino de la administración e inversión de dichos recursos, destinados, en todo momento, al financiamiento de su jubilación o necesidades excepcionales, como lo son vivienda o las derivadas de una enfermedad terminal.

IDEA MATRIZ

El presente proyecto de Reforma Constitucional, tiene como objeto garantizar la propiedad y destino de los recursos previsionales, de forma tal que el ahorro existente en sus cuentas de capitalización individual, sean dispuestos libremente por sus propietarios y no puedan ser objeto de normas que conculquen los derechos que a cada afiliado le asista.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Agrégase los siguientes nuevos incisos al artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República:

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán emitir un certificado que especifique el monto de ahorro previsional que cada afiliado tiene al 31 de octubre del año 2021. Dicho certificado, deberá estar disponible para los ahorrantes en un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar de la solicitud de emisión por cada afiliado. A partir de su emisión, los recursos consignados en el certificado de ahorro previsional, así como la variación que experimente su saldo, como producto de las rentabilidades de los fondos en que se encuentran invertidos, no podrán ser destinados a otro objeto que los establecidos en este artículo.

Los afiliados podrán endosar el mencionado certificado de ahorro previsional, con el siguiente destino:

- a) Los afiliados que, al 31 de octubre de 2021, cuenten con recursos previsionales que no excedan los dos millones de pesos, podrán retirar el cien por ciento de sus ahorros previsionales, endosando el mencionado certificado y depositándolo en cualquier cuenta bancaria de la cual sean titulares. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán traspasar los recursos consignados, en cada certificado de ahorro previsional, a la cuenta bancaria individual de cada cotizante, en el plazo máximo de 30 días hábiles, a contar del mencionado endoso.
- b) Los afiliados que, al 31 de octubre del presente año, cuenten con recursos previsionales que excedan los dos millones de pesos, podrán retirar hasta dos millones de pesos, en los términos indicados en el inciso anterior.
- c) Mantener su cuenta de capitalización individual en las condiciones pactadas al 31 de octubre de 2021.
- d) En caso de que el sistema de capitalización individual sea modificado en forma tal que el afiliado o cotizante no pueda escoger su administradora de fondos o sea suprimido por una futura nueva normativa constitucional o legal, los mencionados recursos previsionales, deberán ser destinados a un sistema de administración de fondos de pensiones que el propio afiliado, propietario de dichos recursos, elija sea estatal o privado.. El mecanismo de retiro de los mencionados recursos será el indicado en el inciso a) precedente.
- e) Endosarlo a una entidad bancaria, regulada por la Comisión del Mercado Financiero, para que dichos recursos sean administrados por fondos de inversión, que tengan por único objeto la administración de fondos destinados a la financiación de pensiones futuras. La Comisión del Mercado Financiero, CMF, deberá reglamentar el funcionamiento de estos fondos.
- f) En ningún caso, una Administradora de Fondos de Pensiones, entidad bancaria o fondo de inversión, podrá destinar una proporción superior al 30% (treinta por ciento) de los recursos de capitalización individual de cada afiliado, a fondos de renta fija, salvo que el propio afiliado lo autorice expresamente.

g) Alternativamente, Los afiliados al actual sistema de capitalización individual, podrán destinar los recursos consignados en sus certificados de ahorro previsional a la compra de un inmueble, bajo los siguientes parámetros:

- Deberá consignarse en la escritura de compraventa del inmueble, la prohibición de vender, ceder o transferir el mencionado inmueble, mientras el cotizante viva. Dicha prohibición deberá estar debidamente registrada en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente a su jurisdicción.
- La prohibición de ceder el uso y goce de la mencionada vivienda, no podrá ser levantada, bajo ninguna circunstancia, mientras el cotizante viva, salvo el caso de enfermedad terminal, diagnosticada u homologada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o cualquier entidad que la reemplace o sustituya.

Los afiliados al sistema de capitalización individual que cuenten con Fondos APV ahorrados podrán mantener sus fondos en un APV en una AFP, de acuerdo a los contratos que vigentes al 31 de octubre de 2021 y bajo las mismas condiciones tributarias en que fueron originalmente pactados.

El traspaso de los fondos de pensiones desde una Administradora de Pensiones a una entidad bancaria o bien cuando sean destinados a la compra de la vivienda del cotizante o sean destinado a paliar los efectos de una enfermedad terminal, no será tributable.

Los afiliados al sistema de capitalización individual que al 31 de octubre de 2021 año hayan sido o sean diagnosticados con una enfermedad terminal y cuenten con un periodo de sobrevivencia no superior a los 12 meses, podrán retirar sus fondos previsionales en el plazo de 15 días hábiles a contar de la solicitud de su devolución o contratar una pensión de sobrevivencia en las condiciones legales, vigentes al 31 de octubre de 2021.

Los afiliados al sistema de capitalización individual que cuenten con una certificación de discapacidad emitida u homologada por el Comisión de Medicina

Preventiva e Invalidez o cualquier entidad, que la reemplace o sustituya, que dé cuenta de una discapacidad laboral irreversible superior al sesenta por ciento, podrán retirar el cien por ciento de sus ahorros previsionales o contratar una pensión de invalidez en las condiciones legales, actualmente vigentes.

Cada afiliado podrá instruir a su Administradora de Fondos de Pensiones para que transfiera sus fondos, sin necesidad de liquidar ni enajenar los instrumentos financieros que componen su inversión en bolsa, únicamente cambiando la administración de los fondos previsionales acumulados mediante el traspaso a una entidad bancaria o fondo de inversión en las condiciones establecidas en el reglamento dictado al efecto por la Comisión del Mercado Financiero.

Una vez que el afiliado cumpla la edad de jubilación podrá optar por la contratación de alguna de las modalidades de pensión vitalicia o de retiro de fondos vigente al 31 de octubre de 2021 o bien por el retiro de la totalidad de sus fondos.

JOSÉ MIGUEL DURANA SEMIR

SENADOR

IVÁN ALEJANDRO MOREIRA BARROS

SENADOR